

Más pobres en México; la clase media se achica

proceso



Enrique Dussel, ideólogo de la 4T:

**"AMLO, UNGIDO
POR EL PUEBLO"**

SEMANARIO DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS No. 2404
27 DE NOVIEMBRE DE 2022 • MÉXICO \$60.00 / USD \$4.80



7 503029 193669



ENTREVISTA CON ENRIQUE DUSSEL

AMLO QUIERE CONSOLIDAR UN LIDERAZGO MESIÁNICO

NELDY SAN MARTÍN

El presidente Andrés Manuel López Obrador se sintió provocado por la protesta que le hicieron desde la oposición en contra de la reforma electoral y en respuesta, convocó a una marcha, a cuatro años de asumir el gobierno, para reunir a muchas más personas y ejercer su función mesiánica, dice el filósofo argentino mexicano Enrique Dussel.

"Hubo una manifestación en la calle contra él y entonces ahora pueden decir: 'Nosotros hemos llenado la calle y usted no'. (AMLO) dice: 'Un momentito, el liderazgo que yo tengo no lo he necesitado ejercer, pero si ustedes me vienen a provocar, vamos a ver quién tiene más liderazgo'. Y vuelve a los modos de legitimidad

de Weber; uno de ellos es la popularidad y entonces la vuelve a ejercer", explica Dussel, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación.

En la entrevista, Dussel, considerado uno de los ideólogos de la 4T y creador de la idea de la "República amorosa" de la campaña presidencial lopezobradorista de 2012, señala que no es una cuestión superficial que López Obrador se ponga al frente de la marcha. Y cita al sociólogo alemán Max Weber, para quien una autoridad se legitima mediante tres principios: legal, tradicional y carismático. Este último se refiere al liderazgo. Para Dussel, el acto de este domingo 27 no es sólo una demostración de carisma, sino de algo más profundo: el mesianismo.

"Weber propone que (el carisma) lo crea la persona que quiere ser líder y, por lo tanto, maneja el liderazgo. Un caso clásico es

Hitler, que tenía un culto a su personalidad, con actos teatrales, con música de Wagner, pero era un carismático superficial. Entonces, ese acto del domingo, en que un líder va a conducir un proceso, puede tener un significado mucho más profundo, yo le llamaría no carisma, sino algo que parece más extraño llamarle: el mesianismo."

El doctor en filosofía e historia hace una diferenciación del concepto de mesianismo de aquel con que el historiador Enrique Krauze intenta ridiculizar a los líderes populares (el "mesianismo tropical"). En cambio, retoma la conceptualización del filósofo alemán de origen judío Walter Benjamin, para quien el mesías, "meshiakh" (en hebreo), es el ungido por el pueblo.

"No es un acto que viene de arriba hacia abajo, sino del pueblo hacia al que invisten como líder, porque el pueblo ve que

La oposición debería defender sus intereses respetando el liderazgo del presidente de la República, dice el filósofo Enrique Dussel, secretario de Formación Política de Morena y con una larga trayectoria de debate intelectual. Para él, es cierto que la figura del mandatario es mesiánica, pero no por autoproclamación, sino construida a partir de un carisma personal por la gente de los sectores mayoritarios, que encuentran en él respuestas cercanas a sus necesidades. Por eso prevé que en la manifestación de este domingo se demuestre el apoyo popular a AMLO, como él pretende.

lo necesita y que el pueblo va a sacar ventajas si lo consagra como autoridad, para que conduzca el proceso de transformación", dice el doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid.

"Es una dialéctica entre el pueblo y una persona -prosigue- que, siendo descubierto por el pueblo como un instrumento de su liberación, lo consagra con 'aceite', lo hace el líder. Entonces, hay que considerar la persona del presidente, que no sólo ha sido elegido: es una persona que desde su juventud siempre cobró, con respecto al pueblo, una tal presencia, que fue realmente descubierto por el pueblo como un conductor."

Dussel pone como ejemplo las movilizaciones populares que detuvieron el intento de golpe militar contra Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores, en 2002.

En el caso de López Obrador, cuando estuvo en la Chontalpa a los veintitantos años llegaba a trabajar antes que saliera el sol, "cuando ellos (los indígenas) llegaban a la milpa a trabajar la tierra, López Obrador los introducía y los conducía a sacar mayor producto agrícola. Lo veneraban. Es decir, se producía una relación entre el líder y el pueblo, que no es jurídica ni procede del líder, sino que el líder ama a su pueblo", dice.

"Lo que pasa es que López Obrador, como Lázaro Cárdenas, pero aún más que Lázaro Cárdenas, tiene ese tacto de una gran empatía con los más simples: con las madres, con los niños, con los campesinos, con los pobres. Y eso le llevó a visitar todos los municipios del país, que no lo ha hecho nadie en la historia."

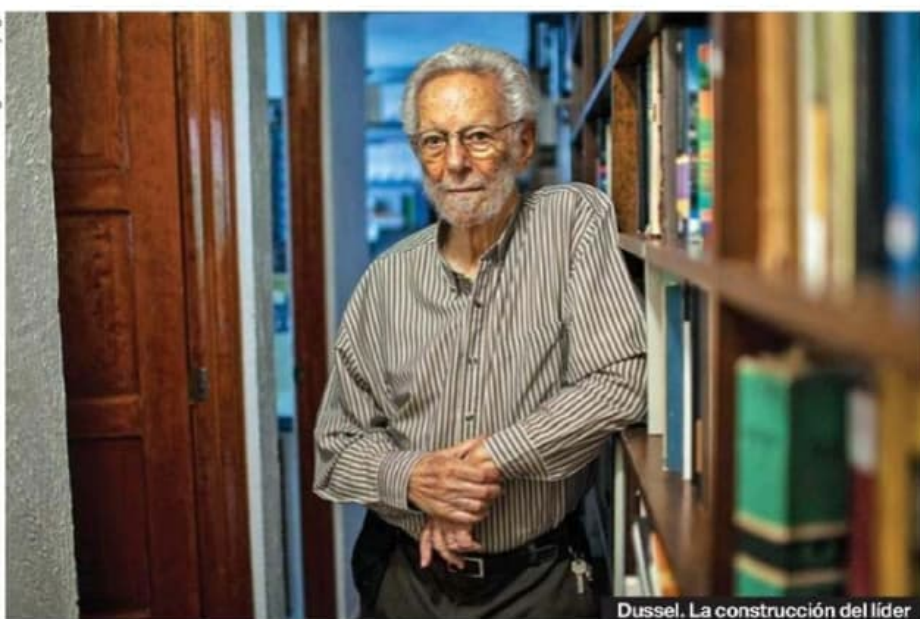
El doctor en historia por La Sorbona dice que la oposición tendría que tenerle más respeto al presidente dado que es un líder popular, pero que no lo hacen porque no les interesa y sólo están buscando atacarlo con temas secundarios, pese a que "la moneda mexicana ha resistido la devaluación" y "la seriedad" con la que lucha contra la corrupción.

"Eso le da ante el pueblo mucha autoridad -afirma-. La oligarquía, que no tiene esa capacidad y no puede tenerla, porque más bien hay un desprecio del pueblo por clase social, por blanquitud de los blancos con respecto a los mestizos y los indígenas, y los pobres, no pueden tener esos gestos. Y claro, como no pueden tenerlo, critican al que tiene y le llaman populismo, pero no es populismo, es realmente veneración que el pueblo puede tener por un líder que los sirve y que se aproxima a sus necesidades."

Dussel asegura que el liderazgo de López Obrador está arriba del propio Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, porque el presidente de México "está afirmando la



Miguel Dimayuga



Dussel. La construcción del líder

soberanía del pueblo ante la soberanía del pueblo norteamericano, de igual a igual, con extrema dignidad y humor.

“Porque logró hacerse amigo de Trump, porque lo apreció, porque fue elegido: ‘Usted, en Estados Unidos está muy bien, yo lo reconozco, pero yo aquí y no meta usted mano’. Entonces no tenía ninguna doctrina internacional, porque ni ha salido de México ni conoce el inglés. Y cuando dijo ‘no intervención’, se transformó en el líder de la política exterior de todos los países de América Latina, porque es no intervención a Estados Unidos, que nos ha intervenido desde siempre, nos ha quitado dos terceras partes del territorio nacional. Entonces hay que tener un poco de dignidad”, agrega.

Adaptar al INE “a la nueva situación”

Para Dussel no hay contradicción, ni le quita su carácter social, el que sea el propio presidente el que convoque al pueblo a salir a las calles:

“Es perfectamente lícito, no está prohibido que un presidente convoque al pueblo a hacer una manifestación de apoyo para el INE, justamente, que realmente es la fuerza de oposición que tiene el gobierno hoy, porque fue hecho en una época en que el pueblo no eligió esos componentes.”

El también secretario de formación política de Morena escribió en marzo de 2021 un artículo titulado *¿Hasta cuándo?* en el periódico *La Jornada*, en el que llamó a emprender cambios en el INE y el TEPJF porque “responden a instituciones y autoridades elegidas por el antiguo régimen corrupto y

neoliberal” y a que las modificaciones se hicieran antes de las elecciones de junio de 2021. En ese texto advirtió:

“Si el INE logra arrebatarse a Morena la mayoría en ambas cámaras después de junio, será imposible de realizarlas en el próximo trienio, y Morena fracasaría en el intento de ser una época en la historia de México y sólo lograría un exitoso sexenio.”

Sobre ese artículo dice en la entrevista: “Se ha soportado demasiado”. Señala que en Venezuela hay cinco poderes y al poder electoral lo elige el pueblo directamente.

“Se está diciendo que hay que elegir al INE, porque juzga sobre todos los actos electorales. Es un poder de poderes, muy importante, hay que tomarlo muy en serio. No es asunto que se repartan los partidos y sobre todo, antes, en la antigua situación, donde Morena no existía, lo dejaron de lado. Hoy es una fuerza de oposición. Entonces, se quiere decir: si ustedes hicieron una manifestación para apoyar al INE, hacemos una manifestación más numerosa no para liquidar al INE, sino para modificarlo al nivel de la nueva situación del país, que está funcionando mucho mejor que antes y se está respetando el liderazgo de López Obrador”, señala.

—¿Por qué un líder popular necesita darle tanto poder al Ejército? —se le plantea.

—El país no tiene instituciones que no se hayan corrompido, ninguna, ni la Iglesia, porque mire el tema de la pederastia, terrible. Y los militares también tienen problemas.

Menciona como ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isi-

dro Burgos de Ayotzinapa, en la que está involucrado el Ejército, según el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Aclara que no está en favor de los militares, pero indica que se trata de un problema de factibilidad, pues “¿quién puede enfrentar a cientos de miles de gentes armadas en el país? El Ejército”.

“No es una situación normal. Una vez que se resuelva toda esta situación, el Ejército volverá a los cuarteles. Se escandalizan de que el Ejército sea llamado, pero no hay otro que pueda enfrentar a un ejército de la droga. Yo creo que es un mal menor dentro de la factibilidad. En la política lo factible es lo justo. Algo imposible, no lo puedo hacer, es injusto. Pero claro, tiene que ser en base a dos principios: la afirmación de la vida y el consenso de la comunidad. Se intenta cumplir: sube el nivel de vida, hay becas para los viejos, para las madres solteras, para los estudiantes. Se ayuda a mucha gente.”

Dussel recuerda que el crimen está armado “hasta los dientes porque las transnacionales de Estados Unidos le venden armas a cualquiera. Y se lavan las manos como si fuera un país democrático. Ese sí que es un país en favor de los grupos dominantes. No luchan contra la droga, no educan a su pueblo, permiten la venta de armas, y en México, entonces se usan las armas, se asesina a la gente y a su vez producen la droga. Eso corrompe también a nuestro pueblo”.

El filósofo dice que México está en una buena situación económica, aunque reconoce que 50% de las personas vive debajo del nivel de la pobreza de Amartya Sen. Destaca que “la población en general en México vive en una situación de paz”, pese a los altos niveles de desapariciones, homicidios dolosos y feminicidios.

“Hay crimen y secuestros y todo, pero eso es herencia que hay que enfrentarla con una institución armada, como el Ejército”, comenta.

Sobre el neoliberalismo y la oligarquía, Dussel considera que no tienen ningún proyecto y por eso no puede entusiasmar a un pueblo: “Le puede mentir, lo puede engañar. Pero cuando se descubre es cuando se da un tiro en el pie. ¿Qué puede ofrecer el PAN hoy? Nada más que volver a darle contratos a las transnacionales para que se lleven el litio, como pensó nuestra (ex) secretaria de Economía (Tatiana Clouthier), que le salió el PAN de adentro, aunque había apoyado a Andrés Manuel, pero no sabía de economía un poco más crítica, más nacionalista. No tienen proyecto (en la oposición) y están despistados”.

Por eso, insiste, la manifestación de este domingo 27 es un acto en el que López Obrador será correspondido por el pueblo porque la gente se da cuenta de sus acciones y “siente que es de ellos”. ●



La marcha pro INE. Reacciones

Octavio Gómez



LAS REDES DIGITALES OBRADORISTAS, FRACTURADAS

GLORIA REZA

GUADALAJARA, JAL.—La estrategia en el manejo de redes que se aplica desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fomenta la polarización, inhibe el diálogo y hace un uso malintencionado de las plataformas, además de que se ha ido sofisticando y muestra fracturas internas en las que seguidores y militantes del mandatario y de Morena se apoyan y se atacan unos a otros.

“Lo que hoy se detecta es una fractura importante en lo que en un principio se autodenominaron #redAMLOve; ahora están operando de maneras distintas: unos apoyan a unos, otros atacan a otros (del mismo partido). Es un desastre”, señala la doctora Rossana Reguillo Cruz, coordinadora del Laboratorio de Innovación Tecnológica y Estudios Interdisciplinarios Aplicados (Signa Lab) del Instituto de Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Hace cuatro años, con el inicio de la administración del presidente López Obrador, se creó y aún se mantiene dicha estrategia, dice en entrevista la investigadora y académica, doctora en ciencias sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad de Guadalajara.

“Esto no significa que no hay simpatizantes o antilopezobradoristas reales, de carne y hueso, que tuitean por voluntad propia”, aclara. Y precisa que existen campañas pagadas “por actores políticos que no podemos saber quiénes son (...) y operan para acallar una temática”.

Tras analizar en Twitter e Instagram los mensajes relacionados con la marcha en defensa del INE realizada el pasado domingo 13, dice, detectaron que las etiquetas #YoSiVoyALaMarcha y #YoDefiendoALINE crecieron de manera orgánica; en cambio el hashtag #LaMarchaDeLosPendejos, impulsado para denostar la manifestación, no alcanzó una atracción suficiente.

En el caso del gobierno federal, encontraron que la estrategia se realiza a través

de agencias digitales, conocidas popularmente como “granjas de bots”, que venden sus servicios de comunicación pública “para acallar, impulsar, todo lo que vemos cotidianamente”, en especial en Twitter.

“Comportamiento anómalo”

Signa Lab surgió en 2016, dos años después de que la investigadora comenzara a recibir amenazas de muerte hasta cinco veces al día, las cuales incluían fotografías de sus hijos, porque participó en las protestas de Ayotzinapa por la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014.

Aunque presentó denuncias, la autoridad no “pudo hacer nada”, por lo que decidió abrir ese espacio de análisis donde se hace un monitoreo cotidiano sobre el comportamiento de la “conversación” a nivel nacional, regional y global. “Algo que para mí fue muy relevante fue tratar de entender cómo operaban las estrategias de manipulación y de orquestación en las redes”, reitera.

La especialista en análisis de redes digitales Rossana Reguillo, coordinadora de Signa Lab del ITESO, revela que según sus estudios sobre el comportamiento de las redes sociales de apoyo a López Obrador, éstas siguen apoyándose en granjas de bots y coordinándose para inhibir y acallar a los adversarios y críticos del mandatario, sólo que últimamente se atacan también entre ellas. Ese comportamiento anómalo crea un clima de incertidumbre para la libertad de expresión.

Signa Lab busca tendencias orgánicas e inorgánicas. Estas últimas son "procesos de impulso para acallar un problema social o, al revés, para impulsar una figura, un tema, etcétera", y se dedican a "alborotar las emociones, ponernos en un estado emocional de mucha crispación". Por el contrario, en la acción orgánica "nos interconectamos (...) vamos polinizando democráticamente las conversaciones".

En enero de 2019 Signa Lab detectó "un comportamiento muy anómalo en la red, un cambio profundo en la discusión en internet a partir de la llegada del nuevo gobierno; empezamos a ver el crecimiento exponencial de cuentas artificiales, de cuentas de ataque, de cuentas falsas".

También se evidenció un "crecimiento de tendencias en tiempos récord en cuentas de reciente creación que hacían muchísimas intervenciones muy agresivas. Todo esto arrancó de manera muy fuerte con los ataques del presidente López Obrador al periódico *Reforma*" en la mañana, dice la especialista.

Esto derivó en que Signa Lab hiciera su primer estudio denominado "Informe: democracia, libertad de expresión y esfera digital", en el cual se analizan las tendencias y topologías en Twitter sobre la #red-AMLOve. El documento se publicó el 28 de febrero de 2019.

La también antropóloga recuerda que en ese momento detectaron una estrategia que funciona "más o menos de la misma manera, aunque ahora esas redes están muy fracturadas, pero nos dimos cuenta de lo que en el laboratorio llamamos la concatenación de voces".

Prosiguió: "Primero se pone la narrativa en la mañana; por ejemplo 'INE corrupto', para hablar de algo actual. Enseguida de eso, entran unas cuentas que nosotros bautizamos en el laboratorio como maestras o maestros de ceremonias del rap (...) que son los que salen a la escena pública, captan el clima, el ambiente y ponen la narrativa".

Esas cuentas generan el contenido, marcan y definen la narrativa. A partir de ahí viene "la segunda oleada de cuentas, que es lo que nosotros llamamos coro (...) que es el conjunto de cuentas automatizadas o semiautomatizadas que operan para amplificar (replicar) el llamado de las cuentas que ponen las narrativas".

El tercer paso es cuando "se suman los troles, que son cuentas que no siguen un guion específico; es decir, no siguen la narrativa básica, sino que lo que hacen es atacar blancos específicos, blancos directos para asustar, callar a la persona, etcétera".

La última parte del proceso es que el mensaje llega a la "gente común y corriente, que de manera muy inconsciente se sube a tendencias de ataque porque se emocionan y les parece padrísimo (...) especialmente en Twitter (pues) te confirman tu sesgo cognitivo, lo que tú piensas".

Explica que en las redes sociales también existen "cuentas Gólem", "que eran seres inanimados que se creaban para que tomaran vida. Entonces son cuentas automatizadas que son sacrificables, o sea son cuentas suicidas que saben que van a violar todas las normas de contenido, y no importa porque su misión es atacar".

Aunque el laboratorio cuenta con una base de datos "de las cuentas que participan en este tipo de campañas", que se va actualizando, Reguillo indica que es difícil contar todas las cuentas porque se crean de manera masiva en "periodos pico y luego desaparecen o se borran".

Vaticinó que el "uso faccioso y pagado de las redes sociales" se irá incrementando porque existe una "creencia falsa en la clase política que piensa que ganar en las redes es simultáneamente ganar en las calles, (pero) eso no es lo mismo".

Casos de análisis

Signa Lab ha publicado diversos estudios relacionados con la estrategia de las redes so-

ciodigitales (Twitter, Facebook, Instagram) a favor del presidente de la República.

El "Informe: democracia, libertad de expresión y esfera digital" se elaboró en el contexto de los 100 días de gobierno de López Obrador. En él se revela que en Twitter seguidores del presidente atacaron y lanzaron campañas de ridiculización contra periodistas, medios de comunicación y usuarios críticos hacia las acciones del mandatario, por medio de las etiquetas #PrensaFifi o #Chayoteros, que se convirtieron en tendencia durante enero y febrero de 2019.

También se menciona que la campaña de desprestigio y burla contra el periódico *Reforma* se inició desde la cuenta del usuario @Fafhoo, que se identifica como fundador de la #redAMLOve. En el análisis, Signa Lab detectó casi 99 mil tuits que utilizaron los hashtags #ReformaTodoLoDeforma, #NoSoyBotSoyReal y #RedAMLOve.

Otro caso que publicó Signa Lab es "Ataques selectivos: estrategias de desprestigio y descalificación. El caso de experiodistas de Notimex". En este estudio detectaron que los extrabajadores de la agencia oficial se convirtieron en blancos de una estrategia dirigida y coordinada, principalmente de cuatro cuentas de Twitter.

Una de ellas, identificada como OverflowLucio, tiene una relación fuerte con las cuentas más activas ligadas a la #Red-AMLO, como @LOVREGA, señalada por ser proclive a crear tendencias de modo atípico en Twitter.

Un tercer estudio denominado #4T2-AñosEnRedes exploró el canal oficial de la Presidencia en YouTube; se encontró que los videos que generaron más reacciones fueron la primera conferencia de López Obrador, el diálogo con miembros de la CNTE, la rifa del avión y la estrategia de seguridad.

Rossana Reguillo lamenta que la estrategia que implementa en redes sociales el gobierno federal afecte la libertad de expresión y la integridad periodística, además de generar desinformación.

"La primera consecuencia es el impulso de un discurso de odio hacia ciertos actores; pienso en los periodistas que se han convertido en blanco de ataques muy terribles y peligrosos. Esa idea de que (el ataque) es digital y no importa... claro que importa", recalca.

Otra consecuencia, advierte, es que "a mucha gente ya le da miedo opinar, o gente muy interesante que se ha ido retirando de las redes sociales porque cada vez que aparecen con un mensaje le tiran encima baldes de odio".

Un efecto más es que "se siembra desinformación, o las famosas *fakenews*, que son entre verdades a la mitad, entre mentiras, etcétera. Eso genera un clima de mucha incertidumbre para la libertad de expresión". ●

Varias encuestas del Inegi revelan que los salarios bien pagados se están extinguiendo y los de algunos sectores, como el de servicios -que benefician sobre todo a la clase media- vienen experimentando una “movilidad descendente”. La situación se agrava pues, según el catedrático del Tecnológico de Monterrey José Luis de la Cruz, a este fenómeno se suma la reducción de los puestos de trabajo.

CLAUDIA VILLEGAS

El golpe seco de la inflación al poder adquisitivo, las secuelas de la pandemia en el deterioro del Producto Interno Bruto (PIB), los despidos y las medidas de austeridad en el sector público, así como las reformas para eliminar las prácticas de subcontratación, se han transformado en un ancla para los 47.2 millones de mexicanos que forman parte de la clase media, aquellos que ganan más de 500 pesos diarios.

ADVIERTEN ANALISTAS:

LA “MOVILIDAD DESCENDENTE” LE PEGA A LA CLASE MEDIA



Miguel Dávila

La cifra preocupa a los analistas porque el patrón que está marcando el deterioro de al menos una década en la expansión de la clase media, podría generar un grave retroceso en este segmento de la población a pesar de que en el país 57 de cada 100 personas que nacía en hogares del extremo superior de la escala socioeconómica—clase media y alta—se mantenían ahí el resto de su vida.

En la clase media mexicana se estaría presentando una movilidad, pero descendente ante el contexto adverso para acceder a oportunidades.

Los mexicanos con ingresos de al menos 20 mil pesos al mes—el monto que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos consideraba mínimo para considerar a una persona como parte de la clase media en México—han disminuido a sólo 42.2% de los hogares mexicanos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo que se compara negativamente con el 46.7% que habían alcanzado en 2018, cuando se registró el nivel más alto de los últimos 20 años.

En la Ciudad de México la clase media representa 58.9% de los hogares, según el Inegi. Y, de acuerdo con la Fundación Espinosa Yglesias, la capital observaba uno de los patrones más positivos para la movilidad social entre las clases sociales de la parte superior de la escala socioeconómica.

Mientras que entre 2010 y 2018 el número de hogares en términos absolutos considerado en el estrato de clase media creció de 12.2 millones con un universo de 43.9 personas, para llegar a 2020 a 16.2 millones de hogares con 53.4 millones de mexicanos, en 2020 los hogares de clase media sólo sumaron 15 millones, con 47.2 millones de personas.

Se debilita el salario medio

Esta movilidad descendente podría explicar algunos de los cambios del Coeficiente de Gini, un indicador que refleja mayor desigualdad en los ingresos laborales entre más se acerca a la unidad y que presentó una disminución anual, entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, al bajar de 0.509 a 0.493. Esto abona a la tendencia de decrementos anuales por quinto trimestre consecutivo, lo que podría ser positivo.

Sin embargo, el problema es que, por primera vez, dentro de esta tendencia el decremento de la desigualdad se debe a una caída del ingreso laboral real per cápita en el último quintil de la población, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En ese quintil se encuentran los mexicanos que perciben ingresos de entre 7 mil y



De la Cruz. Precarismo laboral

7 mil 200 pesos y que, por su nivel de ingresos, no podrían considerarse clase media. Sin embargo, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también demuestran que los puestos registrados con más de cinco salarios mínimos son los que menos están creciendo.

Entre el segundo y el tercer trimestres de 2022, el Coneval reporta una disminución real del ingreso laboral por persona en todos los quintiles de ingreso. Esta disminución se concentró, por un lado, en el primer quintil (20% de la población de menores ingresos), cuyo ingreso laboral real per cápita promedio en este periodo pasó de 208.01 a 189.50 pesos mensuales, un retroceso de 8.9%; y, por otro lado, en el quinto quintil (20% de la población de mayores ingresos), para el cual su ingreso laboral per cápita disminuyó de 7 mil 441.33 pesos a 7 mil 198.14 pesos, una caída de 3.3%.

Lo mismo está sucediendo con los salarios de los mexicanos que forman parte de la clase media, pues las empresas no están compensando ni aumentando esos niveles de ingresos por la necesidad de reducir costos ante el impacto de la reforma para contrarrestar la informalidad laboral y el *outsourcing*, explica José Luis De la Cruz, catedrático y analista económico.

Al mismo tiempo, dice, el incremento al salario mínimo cambió el escenario de análisis para considerar en México a una persona como parte de la clase media.

En otras palabras, en realidad, un salario de 20 mil pesos al mes no debería ser ya un punto de partida para ubicar a una persona en México en este nivel socioeconómico, porque ahora los salarios mínimos para la clase baja son simplemente más altos, aunque todavía insuficientes para garantizar todos los satisfactores. La diferencia es

que este segmento recibe también transferencias desde el gobierno federal. Y Esta tendencia se exacerbó, la de personas que ganaban más de tres o cuatro salarios mínimos, a partir de 2019 y se agudizó con la crisis de 2020, agregó el especialista.

Ahora, lo que se conoce como salario medio se debilita, y con ello el número de personas que ganan más de 20 mil pesos al mes. Tan sólo en septiembre pasado, de acuerdo con un análisis de las cifras del IMSS, la economía mexicana registró el nivel mínimo histórico de trabajadores con ingresos de cinco salarios mínimos.

El analista Tomás de la Rosa, a partir de las estadísticas del organismo tripartita, reveló que hace 15 años, 12 de cada 100 trabajadores cobraban más de cinco salarios mínimos y en septiembre pasado sólo 1 de cada 100 registró ese ingreso. Los salarios bien pagados se están extinguiendo.

De la Cruz explica que otra política pública que desde el gobierno ha impactado a la clase media ha sido la decisión de eliminar las prestaciones, reducir salarios y eliminar puestos en las estructuras del sector públicos.

Y destaca: "hubo tanto una pérdida de puestos laborales como una reducción en el salario que estaban percibiendo. Entonces, un segundo elemento, que se suma a la tendencia que ya tenía la economía, es la fuerte disminución en los salarios del sector público".

Además, después de la pandemia como lo confirman diversas encuestas del Inegi, en algunos sectores, como el de servicios, los salarios promedio están estancados. Las remuneraciones promedio siguen siendo bajas, lo que afecta a una actividad, la de servicios profesionales, que emplea a gran número de mexicanos que pertenece a la clase media. ▶

Entonces, agrega De la Cruz, se genera un doble impacto para la clase media; salarios estancados y reducción de los puestos de trabajo. Aún más, la debilidad del nivel de consumo de este segmento de la población impide que la facturación del sector servicios se recupere, lo que consolida un círculo vicioso que sólo podría romperse si la economía crece más allá de uno o dos puntos porcentuales.

El estrato de clase alta también se vio afectado luego de que entre 2010 y 2018 pasó de 724 mil hogares a 429 mil, con lo que su peso en el número de hogares en México ya no fue de 2.5%, sino de 1.2%.

La clase alta se ubica mayoritariamente en Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México. En el mismo periodo, los hogares de clase baja, según los datos del Inegi, aumentaron de 51.1% a 56.6%; en otras palabras, se incrementó el número de hogares que ganan menos de 20 mil pesos, una movilidad a la inversa que preocupa a los economistas.

Fenómeno regional

El fenómeno no es privativo de la economía mexicana, pues al cierre de 2020 más de 4.7 millones de personas en América Latina dejaron de pertenecer a la clase media, según el Banco Mundial (BM).

Por la pandemia y el coronavirus se registró una disminución del ingreso en este segmento socioeconómico a nivel del continente; sin embargo, en México las políticas públicas agudizaron el impacto como un golpe seco, generando que muchos descendieran de esa clase social, lo que también afecta a la economía.

El BM considera que el ascenso de la clase media es lento y complicado en cualquier economía. La movilidad social (ascendente) requiere de décadas de esfuerzo, de creci-

miento del PIB y de competitividad. Antes de la pandemia, el Banco Mundial había registrado una reducción en los números de pobres que lograban llegar a la clase media, lo que también reducía la desigualdad.

Ese proceso se detuvo en México porque en este momento las empresas están privilegiando el costo de regularizar los puestos de trabajo que mantenían bajo esquemas de subcontratación. Entonces, para mitigar, deciden reducir las actualizaciones para los salarios de la clase media.

Además, la inflación ha impactado el costo de los insumos en todos los niveles, encareciendo la producción.

“Ante el aumento de los costos laborales y ante el aumento en los costos de los insumos, sobre todo, reitero, pequeñas, medianas y microempresas, lo que están sacrificando son los altos salarios, y eso está afectando a la clase media”, destaca De la Cruz, catedrático de las Escuela de Graduados en Alta Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey.

Aún más, si el PIB no crece, si la generación de riqueza se estanca y se debilita, cuando la población aumenta, las mediciones en términos de ingreso per cápita comienzan a confirmar ese debilitamiento y que cada vez le corresponde menos riqueza y oportunidades a cada mexicano.

En el caso de la clase media, por lo tanto, las remuneraciones que recibe cada día son menores o no crecen ya a la misma velocidad que la inflación. Es más, este estrato socioeconómico no recibe transferencias del gobierno porque la mayor parte de los programas de apoyo se dirigen a los segmentos más pobres, mientras que los segmentos de mayores ingresos, en la clase alta, no sólo tienen percepciones, sino sobre todo inversiones, por ejemplo, financieras.

Entonces, la clase media es la más desprotegida cuando el PIB no crece. ●

RAFAEL CRODA

A cuatro años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de su lema emblemático, “por el bien todos, primero los pobres”, una frase de discurso que no se traduce en mejores condiciones de vida para 45 millones de mexicanos cuyas necesidades básicas están insatisfechas.

Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgadas el jueves 24 por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, México cerrará este año con una pobreza de alrededor de 35.4%, porcentaje similar al que dejó en 2018 Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno.

Esto significa que, a lo largo de la administración de López Obrador, quien cumplirá cuatro años en el cargo el próximo 1 de diciembre, el número de pobres no se ha reducido, sino que ha aumentado en casi 1 millón de personas —pasó de 44 a 45 millones— como resultado del crecimiento demográfico.

En el *Panorama Social 2022* de la Cepal, presentado el jueves 24 por Salazar-Xirinachs, México aparece incluso como el segundo país más pobre de América Latina, sólo detrás de Honduras, donde la pobreza llegó a 52.3%, según mediciones del organismo regional.

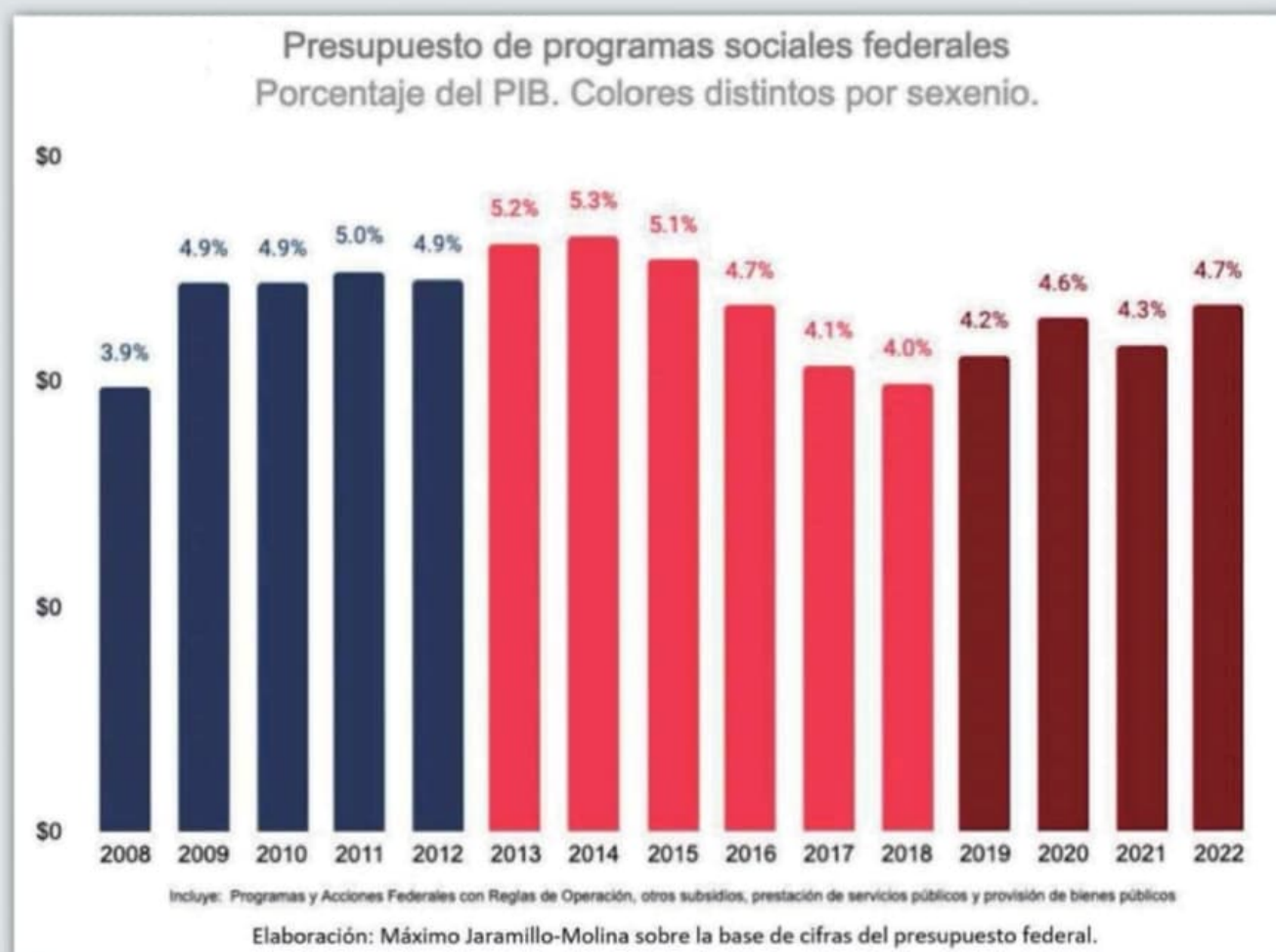
En ese estudio, Bolivia, gobernado por el izquierdista Luis Arce, figura como un país que tiene una pobreza de 29%, casi dos puntos menor que la que registraba antes de la pandemia del covid-19 y más de seis puntos por debajo de la que tiene México.

De acuerdo con los datos de la Cepal, la pobreza en México llegó en 2020 a 37.4% y a 9.2% la pobreza extrema, lo que implicó un aumento de casi dos puntos en ambos indicadores con respecto a 2018. En 2022 se volvería a los niveles prepandemia, según proyecta el organismo regional.

El economista y cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Máximo Jaramillo-Molina, dice a *Proceso* que los malos resultados de López Obrador en materia de combate a la pobreza obedecen a una política social regresiva “y más neoliberal” que la de sus antecesores, en la que aumentaron los subsidios a los ricos y bajaron las transferencias a los hogares más vulnerables.

De acuerdo con el doctor en sociología de El Colegio de México, López Obrador incluso destina menos recursos que Peña Nieto, en términos proporcionales al Producto Interno Bruto (PIB), en el financiamiento de programas sociales.





CUATRO AÑOS DE PROMESAS INCUMPLIDAS

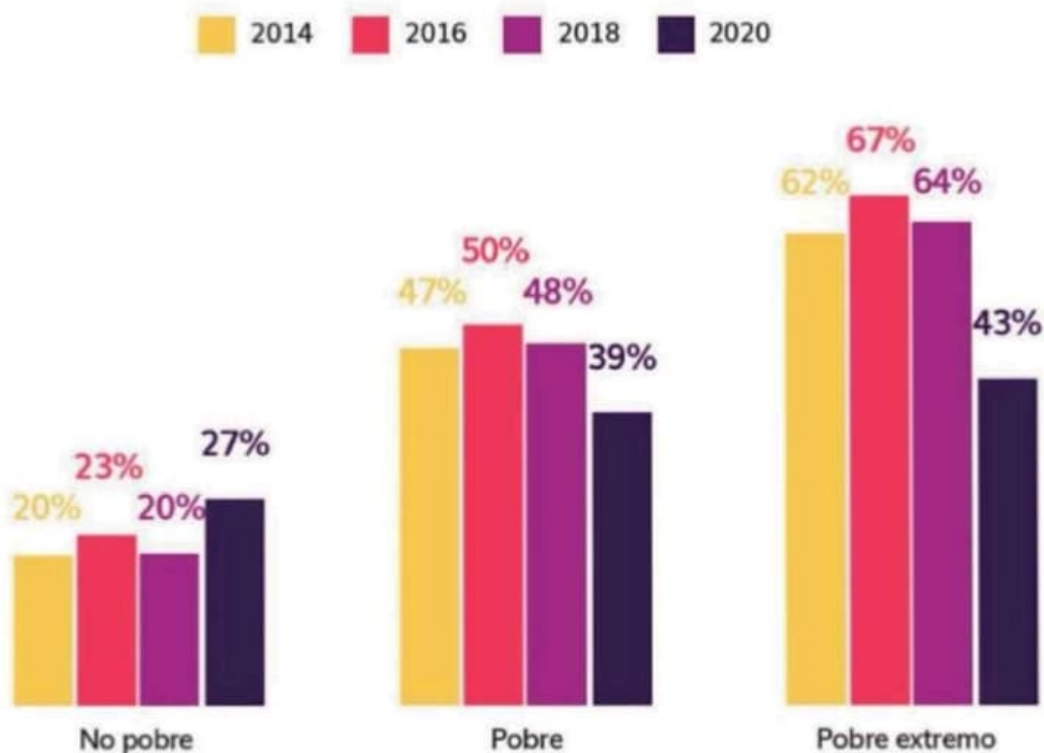
EL AUMENTO DE LA POBREZA, REFLEJO DE UNA POLÍTICA SOCIAL REGRESIVA

De acuerdo con proyecciones de la Cepal, México cerrará 2022 con alrededor de 35.4% de su población en pobreza, porcentaje similar al que dejó Enrique Peña Nieto en su último año de gobierno, lo que lo ubica como el segundo país más pobre de América Latina, sólo detrás de Honduras. Para el analista Máximo Jaramillo-Molina, esos datos evidencian “una continuidad neoliberal”.

Según un estudio de Jaramillo-Molina basado en datos del presupuesto aprobado por el Congreso, el financiamiento de los programas sociales del gobierno federal durante los primeros cuatro años de Peña Nieto fue equivalente a 5.07% del PIB, mientras que en los primeros cuatro años de López Obrador el porcentaje bajó a 4.45%.

Este año los programas sociales del gobierno llegaron a 4.7% del PIB y el investigador estima que en 2023 llegarán a alrededor de 5%, porcentaje menor que el que

Porcentaje de población que recibe programas sociales Según situación de pobreza (CONEVAL).



Elaborado por el Instituto de Estudios sobre Desigualdad con base en la encuesta ENIGH del Inegi (2020)

registró Peña Nieto en sus tres primeros años de gestión.

“Si López Obrador de verdad hubiera querido aumentar el gasto social, habría impulsado una reforma fiscal (como lo hizo Gustavo Petro en Colombia y lo busca hacer Gabriel Boric en Chile) para aumentar la recaudación y hacer que los ricos paguen más impuestos con fines redistributivos”, plantea el economista de la Universidad de Guadalajara.

Continuidad neoliberal

Para Jaramillo-Molina, con López Obrador hay “una continuidad” en materia de política social respecto a sus antecesores.

“La pobreza –dice– se está tratando de la misma forma, los programas socia-

les son fundamentalmente los mismos y el presupuesto social es incluso un poco menor. Lo más sobresaliente que ha pasado es que el presidente les ha quitado dinero a muchos programas para dárselo a la pensión de los adultos mayores.”

Y explica que, en el balance, los hogares más pobres de México reciben incluso menos recursos que en sexenios anteriores porque López Obrador ha volcado el gasto social a las pensiones de adultos mayores, que en 2023 concentrarán las dos terceras partes del presupuesto social, cuando al principio del sexenio representaban menos de 40%.

Este gobierno, asegura el investigador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, ha instrumentado “una política social no integral, carente de un enfoque de

derechos humanos e insuficiente para las necesidades que tiene el país” en las áreas de combate a la pobreza y a la desigualdad social.

Dice que hay “cambios muy publicitados, como la pensión a los adultos mayores, pero si no se hace un esfuerzo para aumentar la recaudación y el gasto social, no hay forma de que esto cambie en el corto y en el mediano plazo”.

De acuerdo con Jaramillo-Molina, es positivo que se hayan universalizado las pensiones a los adultos mayores, pero la política social de López Obrador “fracasó en términos de que no logró que el discurso de ‘primero los pobres’ se hiciera realidad, y fracasó en lograr el objetivo de acabar con la pobreza extrema (que según la Cepal es superior a 9%) y de disminuir

la pobreza de manera importante". Pero lo que para el investigador resulta más paradójico es que el gobierno de "primeros pobres" haya aumentado las transferencias sociales a los sectores de mayores ingresos a costa de reducir beneficios a quienes más los necesitan.

Según una investigación del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, el porcentaje de hogares en extrema pobreza que se benefició con programas sociales en 2018 llegó a 64%, mientras que en 2020, ya en el gobierno de López Obrador, la cifra bajó a 43%. En cambio, las ayudas a los hogares no pobres aumentaron en siete puntos porcentuales en ese mismo lapso.

Jaramillo-Molina considera que esto evidencia "una continuidad neoliberal" en política social, porque persiste el enfoque "de dedicar pocos recursos a la protección social y no subir impuestos a los ricos para transferirlos a los más pobres".

Países como Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y hasta Venezuela tienen un gasto social más alto que el de México en proporción del PIB.

Jaramillo-Molina señala que la característica del gobierno de López Obrador de aumentar las transferencias monetarias directas -vía pensiones y dinero para el cuidado de menores, por ejemplo- "crea lo que se conoce como una mercantilización del acceso al bienestar, y esto se presta para prácticas clientelares".

Dice que hace falta realizar un estudio serio sobre este fenómeno, pero señala que ya hay abundantes denuncias sobre el manejo clientelar de estos recursos a través de los "siervos de la nación", como se conoce a los promotores del voto de Morena.

Pobreza, atada al crecimiento

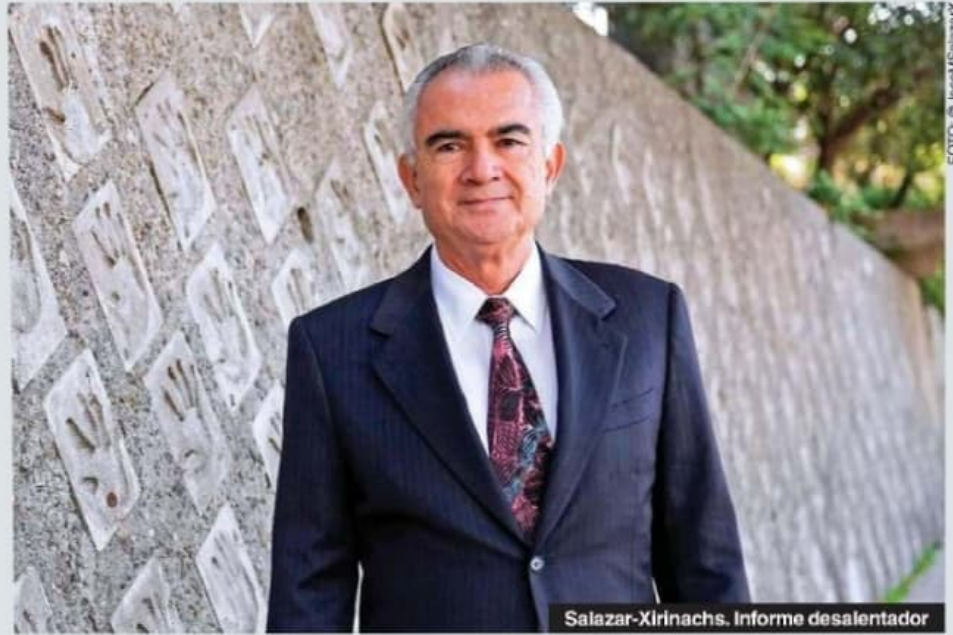
El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, dijo durante la presentación del *Panorama Social 2022* que el combate a la pobreza en la región está atado al crecimiento económico, que se anticipa bajo para los próximos años.

De acuerdo con datos del organismo, el año pasado el crecimiento económico de México se ubicó en 4.8%, porcentaje que fue insuficiente para recuperar la contracción de -8.5% acumulada durante los dos primeros años de gobierno de López Obrador.

La Cepal espera que México recupere el PIB que tenía en 2018 "alrededor de 2024", último año de gobierno de López Obrador.

En 2022 la economía mexicana crecerá apenas 1.9%.

López Obrador ha dicho que el decrecimiento que acumula la economía mexi-



Salazar-Xirinachs. Informe desalentador

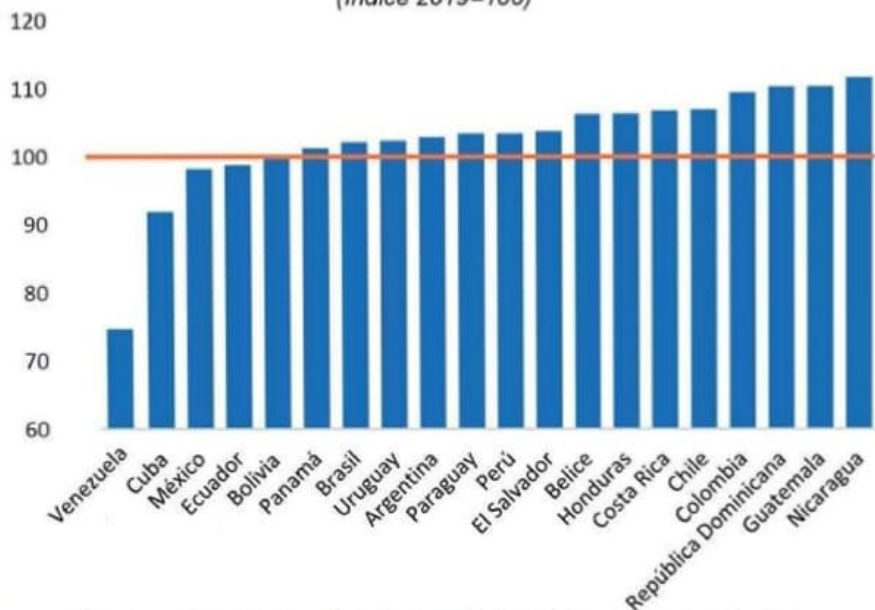
FOTO: © Josem/SalazarMX

cana desde que él es presidente se debe a "los efectos devastadores de la pandemia" del covid-19 y a otros factores externos, como la invasión rusa a Ucrania y el proceso inflacionario global. Además, ha dicho que México "está creciendo más que otros países".

Lo cierto es que, de acuerdo con los datos y proyecciones de la Cepal, México acumulará en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador (2019-2022) una caída del PIB de -1.8%, mientras que en ese mismo lapso América Latina habrá crecido en promedio 2.5%.

En 2022, sólo México y otros tres países de América Latina todavía no habrán recuperado el nivel de PIB prepandemia

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA: NIVEL DE PIB 2022 VS NIVEL PREPANDEMIA (Índice 2019=100)



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.



JUANITA GOEBERTUS, DE HRW

“RIESGO INMENSO”, LA FALTA DE CONTROL CIVIL SOBRE EL PODER MILITAR

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ— A pocos días de que se cumplan cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, dice que el balance del mandatario en el área de los derechos humanos es “muy preocupante”.

En entrevista con *Proceso*, Goebertus señala que durante el gobierno de López Obrador “se ha erosionado la calidad de la democracia mexicana”, y la causa “directa” de ese deterioro son “los rasgos autoritarios y el carácter típicamente populista” del presidente.

La abogada colombiana y maestra en derecho de la Universidad de Harvard, recuerda que, como candidato, López Obrador

generó “una expectativa, porque hablaba de la desmilitarización de la seguridad pública y de la defensa de los derechos humanos, y lo que nos hemos encontrado a lo largo de su gobierno es todo lo contrario”.

Y estos rasgos, indica, se han venido agudizando en la parte final del sexenio, en la que “el tema más grave es la defensa de la militarización como el punto culmen de ese proceso, de esa deriva autoritaria de López Obrador”.

“En vez de tratar de echar para atrás la militarización, que ya lleva muchos años en México, tomó medidas que fueron mucho más allá de las que tomaron sus antecesores”, dice la experta en derechos humanos.

Para Goebertus, el grado que ha alcanzado la militarización en México, con el control del Ejército y la Armada en el combate a la inseguridad pública y en la construcción de obras emblemáticas del gobier-

no, así como en su administración a través de concesiones, tiene al país “en riesgo”.

—¿Usted cree —se le pregunta— que existe el riesgo de que ese militarismo se traduzca, en un momento dado, en una toma de posición de los militares a favor de un proyecto político en una coyuntura electoral específica?

—Esa ha sido una experiencia en el pasado —asegura—, cuando no hay control civil del poder militar, la posibilidad de que los militares se vuelvan actores políticos directos es muy alta, y también de que puedan ellos mismos participar luego en procesos de gravísimas violaciones a derechos humanos.

“Por eso la clave en la región, y lo ha dicho la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), es garantizar el control civil del poder militar, y eso es lo que se está socavando día a día en México”, agre-



Avasallante presencia

La colombiana Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, comenta a Proceso que el balance del presidente Andrés Manuel López Obrador en el área de los derechos humanos en sus cuatro años de gestión es muy preocupante; también lo es su propuesta de reforzar al INE, pues busca restringir la independencia del organismo electoral. Pensar que su gobierno es de izquierda es completamente alejado de la realidad. Pero el tema más peligroso, advierte, es la defensa que hace de la militarización.



Goebertus. Preocupación

ga la exintegrante del equipo del gobierno colombiano que negoció la paz con las FARC y excongresista de la centroizquierdista Alianza Verde.

—¿Cuando usted habla del riesgo de que los militares se conviertan en actores políticos directos —se le pregunta a Goebertus— se refiere a la posibilidad de que intervengan en un proceso electoral a favor de un partido?

—Por supuesto —dice—. Es un riesgo inmenso. La falta de control civil sobre el poder militar genera graves riesgos para el estado de derecho. No sólo podrían intervenir en el proceso electoral, sino que el entregar funciones civiles a los militares reduce la transparencia de la información pública, favorece la corrupción y en el pasado ha estado asociada en la región a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con Goebertus, quien tie-

ne su base en Bogotá, las dictaduras militares como las que tuvo América Latina en los setenta y ochenta “son la forma perfecta de generar violaciones gravísimas a los derechos humanos”, y lo que aprendió la región con esos regímenes *de facto* fue “que el control civil del poder militar es la garantía para poder evitar ese tipo de abusos”.

Dice que ella, como colombiana que vive en un país que estuvo más de 50 años en un conflicto armado interno y que registra dinámicas de mucha violencia, sabe, “de primera mano, que cuando se les entregan funciones a los militares, echar para atrás ese proceso no es fácil, y México podría tardar décadas (en) echarlo para atrás”.

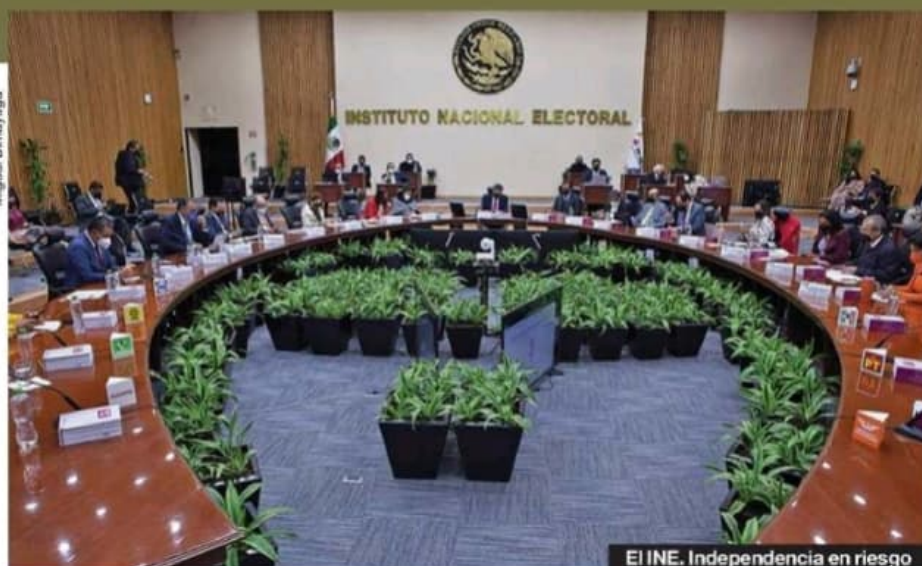
Foco rojo en la región

Goebertus, quien asumió en agosto pasado como directora para las Américas de

HRW y un mes después visitó México, considera que este país figura entre los “focos rojos” de la región en materia de respeto a las garantías individuales “por la deriva autoritaria” que ha tomado el gobierno de López Obrador.

En América Latina, señala, “hay claramente tres dictaduras: Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque no existen elecciones competitivas y hay una represión violenta de toda la oposición, y hay otros tres países, El Salvador, Guatemala y México, que cada vez se vuelven más autoritarios”.

Sostiene que en El Salvador el presidente Nayib Bukele, quien como López Obrador tiene una alta popularidad, “reinterpreta la Constitución para hacerse reelegir”, mientras que en Guatemala el mandatario Alejandro Giammattei y el Congreso “han nombrado a aliados en cargos clave de or-



El INE. Independencia en riesgo

ganismos que deberían ser independientes del Ejecutivo”.

En México, dice la abogada, López Obrador “ataca en forma recurrente en sus mañaneras al sistema electoral, a jueces, a quienes estudian en el extranjero, y estigmatiza a opositores, a organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, a periodistas”.

“Esta deriva autoritaria lleva a que, cada vez más, se persiga a cualquier sector que haga una crítica al gobierno de López Obrador y que por el hecho de criticarlo sea considerado un enemigo”, agrega.

Pero dice que en el caso mexicano “hay una sociedad civil vibrante y es donde más esfuerzos tenemos que hacer para frenar esa deriva autoritaria y evitar que México termine en la pérdida definitiva de su democracia”, la cual tiene deficiencias, como en todos los países de la región, “pero es muy desafortunado ver cómo a lo largo de este gobierno de López Obrador sin duda se ha deteriorado aún más”.

Todo esto lleva a Goebertus a plantear que el gobierno de López Obrador “ni es de izquierda ni es democrático”. Y añade: “Pensar en caracterizar al gobierno de López Obrador como un gobierno de izquierda es completamente alejado de la realidad. Hoy es, ante todo, un gobierno autoritario”.

La experta en justicia transicional y derecho internacional humanitario sostiene que en esta coyuntura latinoamericana los gobiernos ya no se definen en la geometría política de izquierda y derecha, sino por su apego o no a la institucionalidad democrática. “Hoy tenemos en el continente regímenes autoritarios tanto de izquierda como de derecha”, señala.

Y cuenta que, durante su visita a México, en septiembre pasado, se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil que se sintieron esperanzadas con la elección de López Obrador, “y que hoy no ven en él de ninguna manera un líder compro-

metido con los derechos humanos ni un líder con una visión de izquierda”.

El peso del pasado reciente

Goebertus, autora del marco jurídico del acuerdo de paz con las FARC, dice que algunos de los regímenes autoritarios y populistas que existen en América Latina son en parte consecuencia de los gobiernos que los precedieron.

Menciona que, en México, la fuerza política de López Obrador no se puede explicar sin los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que fueron “corruptos e incapaces de proteger a la ciudadanía y de satisfacer derechos económicos y sociales”.

Señala que estos “fenómenos hicieron que ciudadanía en México y en otros países se frustraran tanto, que empezaron a desdeñar la democracia y a generar un sentimiento de que la democracia no les dio lo que les prometió”.

La directora de HRW Américas cree que “México responde un poco a eso, sin duda, y a los gravísimos escándalos de corrupción histórica del PRI, que legitimaron alternativas como la de López Obrador”.

Menciona también la “fracasada” guerra de Calderón contra el narcotráfico, al estallido de violencia en ese gobierno, cuando los homicidios crecieron más de 101% con respecto al de Vicente Fox, y al aumento de la pobreza y la desigualdad en México.

“Es muy similar a lo que vimos en Brasil con (el saliente presidente Jair) Bolsonaro, a lo que vemos con Bukele en El Salvador —señala—. Hay una reacción a los regímenes que no entregaron lo que habían prometido, y eso genera el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos viendo.”

Defensa del INE

Goebertus señala que para HRW, una ONG de defensa y promoción de los derechos

humanos con sede en Nueva York, los ciudadanos tienen derecho a participar de manera libre en elecciones transparentes y, por ello, “es muy importante que los gobiernos garanticen que las autoridades electorales sean independientes”.

Dice que “nos preocupa muchísimo” la iniciativa de reforma de ley del Instituto Nacional Electoral (INE) que anunció López Obrador hace unos días porque busca “restringir significativamente la independencia del organismo”.

Primero, dice, porque reduce los consejeros y somete esos cargos a votación popular, lo que propicia “que haya una intervención política directa en su elección”. Explica que lo segundo es la intención de quitarle al INE el padrón electoral, lo que “se puede prestar para manipulaciones, para uso clientelar de ese registro y para generar desconfianza en el sistema”.

Señala que el tercer punto que le preocupa a HRW es que los sistemas electorales requieren de expertos “y nos preocupa que abrir la elección de consejeros a una lógica de votación popular termine por erosionar definitivamente esta capacidad técnica y la independencia del INE”.

De acuerdo con Goebertus, esa iniciativa “es un nuevo ataque al sistema electoral de México, que coincide con el ataque que han hecho otros gobernantes, como en su momento lo hizo Bolsonaro en el caso de Brasil, y que sólo contribuye a minar la confianza de los ciudadanos en la democracia”.

La propuesta de reforma, dice, “se suma a esta lista de patrones autoritarios en los que ha venido cayendo López Obrador sistemáticamente”.

A la directora para las Américas de HRW le resulta paradójico que el presidente mexicano “ataque precisamente al organismo que hizo posible su elección en 2018 y que permitió, a principios de este siglo, una transición democrática en México hacia un sistema mucho más competitivo”.

Sobre el papel que ha jugado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en este sexenio, con Rosario Piedra Ibarra al frente, la funcionaria internacional señala que para HRW “es muy triste” ver lo que ocurre con ese organismo que, en el pasado, hizo investigaciones “muy a profundidad” sobre la violación de garantías fundamentales en México.

“Hoy tenemos una CNDH que guarda silencio o justifica cualquier acción del gobierno —sostiene Goebertus—. El caso más palpable de esta situación es la forma en la cual esta comisión de derechos humanos defiende a capa y espada el proceso de militarización que lleva a cabo López Obrador. Hoy yo diría que no existe la Comisión de los Derechos Humanos en México”.

GLORIA LETICIA DÍAZ

A un año de la visita a México del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), las cifras consignadas oficialmente revelan que “no vamos por el buen camino” a fin de detener el flagelo que, al cierre del jueves 24, contabilizaba 108 mil 126 víctimas, alerta la experta Gabriella Citroni.

Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, Citroni, quien estuvo en México de visita no oficial la primera quincena de noviembre con motivo del 30 aniversario de la adopción de la “Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” y participó en algunas actividades organizadas por la sociedad civil y por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, perfila un balance de los retos y avances de México en materia de desapariciones. ▶

En su breve paso por México a mediados de mes en visita no oficial, Gabriella Citroni, vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, reiteró que en este rubro el país no va por el camino correcto, pues ahora se asesina incluso a las madres buscadoras -van cinco este año- y, lo peor: antes las desapariciones eran por el probable involucramiento de las víctimas en “temas políticos”; ahora lo son por parte de la criminalidad organizada.

LA EXPERTA GABRIELLA CITRONI:

LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD,

UN “FRANCO RETROCESO”



Los desaparecidos. Asignatura pendiente



Encinas Rodríguez. Cuestionado

En entrevista con *Proceso*, Citroni advierte que no suele recurrir a cifras para hablar del problema, pero en el caso de México el descomunal registro “explica de forma muy gráfica que no creo que vamos por el buen camino, que posiblemente no estamos caminando en la dirección correcta”.

La experta de origen italiano apunta que más allá de la cifra, persisten temas de gran preocupación para el GTDFI, entre ellos los riesgos que corren familiares de desaparecidos, la persistencia del estigma sobre las víctimas, la impunidad generalizada y las modificaciones legislativas que militarizan la seguridad pública, mismas que califica como “franco retroceso”.

“Dada la magnitud de las personas desaparecidas en México, uno se esperaría que fuera un tema muy presente en la sociedad y en la indignación pública, pero en realidad sí hay un sector que lo tiene muy presente pero no es muy extenso.

“Paralelamente, sigue existiendo, muy lamentable, cierto estigma para las personas desaparecidas, un estigma que se adapta a los tiempos”, señala Citroni al recordar que durante las décadas de la Guerra Sucia se relacionaban las desapariciones con el posible involucramiento de las víctimas en “temas políticos” y ahora es con la criminalidad organizada.

“Mientras exista ese estigma, la respuesta que se puede brindar al problema sigue cojeando, es insuficiente, el lema de ‘los desaparecidos nos faltan a todos’, creo que no se ha interiorizado por la sociedad, y ves que sigue ocurriendo el asesinato de madres buscadoras.

“Ante el asesinato de madres buscadoras, uno se pregunta ‘¿por qué puede seguir pasando esto?’. No es la sola respuesta, pero siento que la ausencia de un abrazo colectivo facilita episodios de esta naturaleza y eso va de la mano con la impunidad que sigue siendo absoluta, y es uno de los principales problemas del país”, reflexiona.

De acuerdo con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en lo que va de 2022 cinco mujeres buscadoras han sido víctimas de feminicidio.

Esos casos se suman a los documentados por el proyecto “A dónde van los desaparecidos”, que sumó a 12 familiares de víctimas asesinadas entre 2010 y 2021 en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.

Según el portal, durante el gobierno de Felipe Calderón fueron asesinados tres familiares de personas desaparecidas, entre 2010 y 2011; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos cinco mujeres busca-

doras fueron ejecutadas, entre 2014 y 2018, mientras que de diciembre de 2018 a agosto de 2021 fueron asesinadas cuatro.

Al reconocer como “una demostración de cohesión entre el CED y el GTDFI” el seguimiento que ambos organismos dan a las recomendaciones formuladas por el primero a México, Citroni advierte que a un año de la visita oficial es de reconocer el esfuerzo del gobierno mexicano por crear el “Mecanismo de seguimiento para la atención de las recomendaciones del CED”, bajo la coordinación de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que fue presentado el 26 de octubre.

Magros avances

Para la experta, más que la creación del mecanismo, “lo sustancial será su operación, la información que reúne y después brinda al CED, la transparencia con que se manejará y el espacio que va dar a los familiares de víctimas y asociaciones para que den su punto de vista”.

Admite que ha habido avances sobre todo en materia de búsqueda de personas y en la atención al tema forense, con la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y los Centros de Identificación Humana; Citroni conside-

ra, sin embargo, que la magnitud del problema exige "un mensaje muy fuerte, desde las más altas autoridades, de abrazo a la causa de los desaparecidos y sus familiares", para impactar en la prevención de este delito de lesa humanidad.

"No es un tema que le corresponde sólo a algunos por ahí o a unas madres que van con palas, sino que realmente es un tema de todo el Estado mexicano, ha habido algunos episodios y declaraciones, pero se necesita todavía más, un mensaje más contundente que ayude a la prevención", dice.

La situación se agrava, ante "una discrepancia incomprensible, entre el crecimiento continuo de las desapariciones y los casos judicializados", pues a septiembre de este año hay menos de 50 sentencias por desaparición forzada.

La impunidad, insiste, acarrea "una revictimización muy fuerte de los familiares frente a un sistema de justicia que no camina, que no los cobija y que no brinda respuesta, pero además no ayuda a la prevención".

Citroni toma como ejemplo paradigmático la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que en septiembre pasado cumplió ocho años sin esclarecerse, a pesar de la atención que se le ha dado sobre todo en la actual administración, en que se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.

Al sostener que este asunto "también representa la esperanza para los demás casos, porque la respuesta que se le dé puede facilitar una respuesta estructural más sólida que ayude a los demás", la experta y profesora de derecho internacional en derechos humanos en la Universidad Milano-Bicocca, destaca que en las últimas semanas los familiares han sufrido un "alguno grado de revictimización".

Lo anterior tras atestiguar por parte de las instituciones "actuaciones encontradas o contradictorias, de informes que llegan pero se contradicen después, órdenes de aprehensión que se cancelan, un fiscal en el cual los familiares tenían plena confianza de que tiene que renunciar, un nuevo fiscal que, según tengo entendido, todavía no tiene relación establecida y sólida, volvemos un poco por donde empezamos".

Ayotzinapa, "etapa caótica"

Citroni, quien es asesora de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), señala que el caso Ayotzinapa parece estar "al final de una etapa"; y aconseja a las partes involucradas "tomarse un mo-

mento" para reflexionar en el paso siguiente y que esas actuaciones "no terminarán o se cerrarán en un hasta aquí llegamos, quédense contentos con eso y no se puede seguir más".

Agrega que "es necesario darse un espacio para reflexionar sobre esta última etapa caótica, retomar claramente por parte de las más altas autoridades el diálogo directo con los familiares y recuperar la confianza que se había alcanzado; con justa razón se veían avances y la confianza se construye también, y será imposible recuperarla si no se dan explicaciones sólidas y claras, sólo así se puede seguir avanzando en los pendientes que no se han atendido todavía".

Para Citroni resulta revelador la "etapa caótica" que se desencadenará tras la cancelación de las 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares, que marcó la confrontación entre Alejandro Encinas y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y "en esta etapa de superpolarización quienes pierden son los familiares".

A un año de la visita del CED, que incluyó en su lista de recomendaciones la desmilitarización de la seguridad pública, la vicepresidenta del GTDFI resalta que las reformas legislativas que han pasado el control de la Guardia Nacional a la Sedena y postergado el tiempo de influencia hasta 2028, significan un "retroceso" para el país, en lo que han coincidido varias agencias de la ONU.

Tras recordar que el GTDFI llamó a la desmilitarización tras su visita a México en 2011 y reiteró el llamado en su informe de seguimiento de 2015, la experta admite que durante su reciente visita, advirtió "desesperación" por la situación de inseguridad en el país que generaba "cierta expresión favorable a la presencia del Ejército", pero que más allá de que los estándares internacionales marcan que la seguridad pública tiene que estar bajo control civil y no militar, es importante revisar la experiencia en México de lo que ha significado la militarización.

"Sería interesante revisar si ha funcionado la militarización en los estados de la República donde se ha estado dando durante más años; pienso en los estados del norte, Chihuahua y Tamaulipas, y los datos demuestran que no se ha solucionado el problema, sino más bien justamente la violencia se ha disparado en números y en episodios de choques, de encuentros incluso con un número de muertos y desaparecidos mucho más alto.

"Es una necesidad pensar que si sigo en este sentido me va a funcionar, más bien habría que pensar en otra solución y escuchar a las voces que están sugiriendo otra solución, de desmilitarización gradual acompañada de una inversión muy potente de recursos humanos, económi-


cos y de formación para las diferentes policías civiles. Nadie está diciendo que no hay que combatir a la criminalidad organizada. Todo lo contrario", sostiene.

Mucho por hacer

Citroni cuenta que en su última visita a México presentó un informe que realizó el GTDFI a 30 años de la Convención Internacional en Materia de Desaparición Forzada, documento que alerta coincidencias en los obstáculos que persisten en varios países en el combate y prevención del flagelo.

"Hay poco que celebrar; han pasado 30 años y hay que recordarnos la adopción de esa declaración, que sigue siendo muy relevante en derecho internacional y hay que retomarlo como un llamado de atención de que queda mucho por hacer", dice.

No obstante, la visita no estuvo ajena a momentos esperanzadores. El domingo 13, Citroni acudió a Querétaro para participar en la segunda edición del Festival Esaú, una celebración de carácter artístico, deportivo y de concientización sobre el tema de las desapariciones, en honor a Esaú Ugalde, joven músico desaparecido en septiembre de 2015 y localizado sin vida tres meses después.

"Como asesora de Fedefam analizaba la evolución de los lemas, uno de ellos que me parece muy fuerte es el de 'No hay dolor inútil', y en Querétaro, le decía a don José (padre de Esaú), lo entendí muy bien en el festival, es la manifestación plástica de que puedes tomar un sufrimiento terrible que te acompaña día a día, y volverlo en un mensaje bonito de construcción de vida y de futuro", sentencia Citroni. 



Citroni. Darse un espacio para reflexionar

<https://www.genewa-academy.ch/>

DEMOCRACIA

La palabra democracia volvió a ponerse de moda con la disputa por el INE. Las marchas multitudinarias del pasado 13 de noviembre en su defensa y la que este domingo encabezó López Obrador para intentar apoderarse de él, la han puesto de nuevo en el imaginario público. Lo que, sin embargo, debemos preguntarnos no es por el aparato que dice guardarla, sino por lo que la democracia es.

Como su nombre lo indica, la democracia es el "gobierno del pueblo". La palabra es tan inabarcable que se ha intentado reducirla a la representación, es decir, al voto electoral, lo que ha terminado siempre en gobiernos que representan cualquier cosa menos al pueblo que los eligió. La democracia, por lo tanto, dice Douglas Lummis, no debe entenderse como un sistema ni como un aparato que pretende representarla, sino como lo que realmente es: un proyecto político que la gente manifiesta luchando por él. En este sentido, la democracia, dice Jean Robert, "es la subversión, no permanente, pero siempre posible en cualquier régimen, llámese o no democrático"; un momento político, precisa Sheldon Wolin, que al mismo tiempo que recrea y recuerda lo verdaderamente político, "tiene precarias perspectivas de éxito". La democracia aparece así donde la gente se une para defender su libertad. Es a la vez un horizonte y un presente que como los ciclos del tiempo surge transitoriamente: es una primavera, una estación a la que inevitablemente la sigue otra, la del invierno, donde vuelve a oscurecerse.

En México ha habido varias. Recordemos las más recientes: las movilizaciones de 1968, las que provocó el levantamiento zapatista en 1994, las de las víctimas convocadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011, las de las mujeres el 9 de marzo de 2020 bajo el lema de Un

Día Sin Nosotras. Apareció de nuevo en la marcha del 13 de noviembre. No obstante que los partidos políticos se montaron en ella para intentar expropiarla, la marcha fue en realidad un momento democrático en el que la gente salió a defender su libertad, su capacidad de autogestionarse y gobernarse. Contra ella, el presidente, que dice ser el representante del gobierno del pueblo, llamó a otra. Pero su movilización, convocada desde el poder y nutrida con miles de seres acarreados como bovinos, sólo representa un remedo. Si alguna vez López Obrador vivió algo parecido a una primavera democrática fue en el Éxodo por la Democracia en 1991 en defensa del voto. La que acaba de realizar el 27 de noviembre es, como los mítines que suele hacer desde que llegó al poder, la justificación de una transformación abortada, de una democracia traicionada, la confirmación de lo que Georges Orwell decía con respecto al uso que todo poder hace de ella: un argumento ambiguo que busca ocultar su carácter antidemocrático. La democracia que hoy defiende López Obrador, como la que defienden los partidos, no es la de la gente, sino la de Hobbes, que no creía en ninguna primavera política y cuya única respuesta al invierno era y sigue siendo el Leviatán: la deposición de la libertad y la autonomía de la gente a los pies del Estado y ahora también del crimen organizado que se ha vuelto parte de él.

Es verdad que la democracia no puede prescindir del poder que ella otorga a alguien. Pero también es verdad que ese poder, una vez asumido, termina por traicionarla. Por más democráticos que sean, los gobiernos son en realidad la expresión de un poder robado al pueblo. En ese momento, la democracia pierde su carácter autogestivo y libertario para convertirse en un aparato que administra la vida de la gente mediante el gobierno de unos cuantos o de uno sólo. El poder instaurado en una democracia es paradójicamente lo contrario a

ella. No podemos escapar a esa contradicción. Pero la amarga memoria política debe tenerla en cuenta. Podemos discutir si esto es irremediable; si todo proceso democrático implica siempre un gobierno representativo que termina por traicionar al pueblo. Lo que es incontestable, dice Jean Robert, "es que toda voluntad política", es decir, toda democracia, compromete "una toma de posición frente al poder". Tal y como se manifiesta siempre en esos momentos en los que la gente sale a defender su libertad, ese posicionamiento es una respuesta al poder robado mediante su renuncia a tomarlo: los muchachos del 68, los indígenas zapatistas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las mujeres de Un Día Sin Nosotras y los que marcharon el 13 de noviembre no querían tomar el poder. Expresaban, como siempre se expresa la democracia cuando surgen movimientos de esa naturaleza, su principio supremo: la libre asociación. Paradójicamente, su presencia en las calles, al mismo tiempo que expresa la renuncia al poder, lo ejerce para obligar a quien lo robó y lo detenta a limitarse. Limitar el poder político no es un rechazo anarquista. Es, por el contrario, el ejercicio democrático más profundo: el que hace posible que la libre asociación y la confianza mutua no sucumban bajo el invierno del poder robado.

La democracia está allí donde la libertad amenazada hace a las personas organizarse entre sí para defenderla; está donde el nosotros democrático se expresa como autogestión y guarda la semilla de una nueva primavera.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a Morelos. ●

CRIMINALIZAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

país, pero después de la realización de los encuentros deportivos las personas migrantes empezaron a buscar nuevos lugares de trabajo y así fue como diversos países empezaron a recibir flujos migratorios intensos que salieron de Brasil rumbo al norte del continente.

En consecuencia, la lección es doble. Se tienen varios años previos a la realización de un Mundial para revisar la normativa jurídica a efecto de dar entrada a miles de personas trabajadoras migrantes en las mejores condiciones, pero sobre todo para prever cuál será su situación durante esos años. Se puede aprovechar la oportunidad de la mano de obra migrante para el desarrollo del país en los mejores términos, inclusive previendo canales de regularización para quienes demuestren que su trabajo lo amerita. Pero también se tiene que prever el éxodo migrante que tendrá lugar después de la realización de un encuentro mundial como el que comentamos. Los países vecinos sentirán el ingreso de personas migrantes trabajadoras, por lo que bien podrían prever esta situación para canalizar correctamente la mano de obra que requiere su país, la cual puede ser proporcionada por las personas trabajadoras migrantes que acudieron en apoyo del país anfitrión del Mundial. No se puede decir que no se tenía conocimiento de lo que pasaría, ya son lecciones aprendidas. No olvidemos que el Mundial de Fútbol de 2026 tendrá lugar en Canadá, México y los Estados Unidos. ●

El lunes 21 de noviembre fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en un amplio y desproporcionado operativo –con armas largas–, el licenciado Francisco González Arredondo, exfiscal anticorrupción de Chihuahua. Se le detuvo en la ciudad de Delicias delante de su padre, que lo acompañaba a la tienda muy temprano, y quien tras la enorme impresión que le causó ver llevarse a su hijo, murió de un infarto al miocardio.

Con su padre muerto y ahora en prisión, el licenciado González Arredondo, quizá uno de los fiscales más competentes y honorables de este país, enfrenta una de las mayores vilezas políticas que se hayan podido suscitar en los tiempos recientes: la venganza de la gobernadora “panista” María Eugenia Campos Galván, utilizando al fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte, un incondicional sin pericia que fue su antiguo coordinador de asesores cuando era alcaldesa de la capital.

Se le acusa del delito de tortura psicológica cometido supuestamente en contra de varios testigos con identidad reservada –condición adquirida bajo criterios de oportunidad– que brindaron testimonio en más de 20 carpetas de investigación sobre la corrupción política de César Duarte.

González Arredondo coordinó el megaprocuro de combate a la corrupción que se produjo durante mi gobierno, conocido como la Operación Justicia para Chihuahua y que logró documentar y demostrar ante

decenas de jueces federales y locales el enorme latrocinio que saqueó al estado durante la administración de César Duarte Jáquez, calculado en más de 6 mil millones de pesos. Se trató de un grupo muy profesional de peritos, analistas, policías y ministerios públicos que desarrollaron estrategias y métodos con altos estándares internacionales para investigar redes de corrupción política, seguir la ruta del dinero y capturar a los responsables.

Se ejerció acción penal en contra de 49 personas, entre ellas exservidores públicos y empresarios. Se libraron 92 órdenes de aprehensión, 78 vinculaciones a proceso, y se lograron 16 sentencias condenatorias. Sólo por la vía penal, a través de la reparación del daño y el pago de multas, se recuperaron mil 356 millones de pesos que ingresaron de nuevo al patrimonio del estado. Se aseguraron y embargaron 139 bienes inmuebles, comprometidos en su mayoría por predios rústicos, aunque también se identificaron lotes urbanos, fincas urbanas y un penthouse en condominio, cuyo monto en total asciende a un aproximado de 500 millones de pesos.

Se incautaron miles de cabezas de ganado vacuno, equino y exótico de distintas razas. Y se recuperaron de forma definitiva, mediante declaraciones judiciales de abandono a favor del gobierno del estado, más de 10 inmuebles rústicos y urbanos, entre los que destaca el rancho más grande que tenía César Duarte, Santa Rita, con una extensión de más de 29 mil hectáreas, equivalente a la totalidad del fundo legal de la capital del estado.

Como nunca antes en la historia de la lucha contra la corrupción e impunidad ▶

*Presidente del Comité de Trabajadores Migrantes y sus Familias, de la ONU.
ecorzos@gmail.com
@ecorzososa

se diseñó una estrategia legal a fin de que el litigio de los casos no se agotara en los tribunales locales y alcanzara también los juicios de amparo tramitados por los involucrados en los desfalcos. De ese megaproceto resultaron investigaciones de gran impacto para la opinión pública nacional, como la llamada Operación Safiro, el desvío multimillonario de recursos al PRI de Manlio Fabio Beltrones, y la nómina secreta de César Duarte, un mecanismo corruptor por el cual el exgobernador construyó, mediante sobornos, una red de complicidad y protección.

María Eugenia Campos Galván fue parte de esa nómina secreta, siendo diputada local. El grupo de ministerios públicos coordinado por Francisco González Arredondo la llevó a proceso, como a tantos otros que participaron del mecanismo. Fue acusada de cohecho por recibir poco más de 10 millones de pesos de la nómina secreta, en entregas mensuales de dinero en efectivo a lo largo de dos años, y un juez de control en audiencia pública de juicio oral, en plena campaña a la gubernatura, la vinculó a proceso. Un día antes de su toma de posesión, un magistrado desestimó la vinculación y ordenó reponer el procedimiento. La causa quedó suspendida.

Desde que asumió el poder no descansa en el empeño por tratar de lavarse la cara, pero al mismo tiempo tiene que cogobernar con César Duarte, a quien está indisolublemente unida por el pasado que los compromete. De hecho le entregó al exgobernador de nueva cuenta el control del Poder Judicial del estado, colocando en la Presidencia del Tribunal Superior a la magistrada Miriam Hernández Acosta, ahijada política de Duarte y una de sus testigos de descargo en el juicio de extradición en Miami, Florida.

La burda maniobra para inculpar a González Arredondo de tortura psicológica constituye, además de esa

revancha política, la estrategia del compromiso para favorecer los intereses del exgobernador Cesar Duarte para lograr su liberación. Afirmando que sus colaboradores y testigos fueron torturados buscan desacreditar las investigaciones. O sea, criminalizando las investigaciones le apuestan a legitimar sus afirmaciones acerca de que no tuvieron intervención en el saqueo de las arcas del gobierno durante su gestión.

Particularmente se busca desmontar las investigaciones sobre la Operación Safiro y la nómina secreta; esto se desprende del desarrollo que ha tenido la audiencia de imputación del licenciado González Arredondo. Los testigos de identidad reservada, que ahora se dicen víctimas de tortura psicológica, son los mismos que declararon en el juicio oral que se llevó a cabo en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, *La Coneja*. Se trata de Ever Eduardo Aguilar, José Jaime Bustamante Pérez, Jesús Olivares Arzate y Miguel Ángel Mezquique Aguirre; todos ellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte y copartícipes en la instrumentación de los desvíos de recursos públicos.

Aunque la ley prevé que si un testigo a quien se le brindó criterio de oportunidad (obviamente porque es cómplice o coautor) se retracta de sus imputaciones o bien incumple el acuerdo que firmó con la autoridad, la consecuencia inmediata debe ser que el criterio se le retire y se le procese en la calidad original que tenían, de imputados. Pero la gobernadora de Chihuahua les ha ofrecido, personal y directamente, protección y ahora son testigos protegidos para retractarse, seis años después, de los testimonios que ofrecieron.

En Chihuahua está en marcha una brutal criminalización del combate a la corrupción. A cabalidad, la faceta cínica y corrupta del PRIAN, con la que pretenden regresar a la Presidencia de la República en 2024. ¡Qué vergüenza! ●

Hay eventos que han marcado la historia de los árabes y del Islam, la religión que difundieron –imponiéndola inicialmente– en buena parte del mundo cuando arrebataron al Imperio Bizantino sus posesiones en la franja de Siria y Palestina, así como en Egipto. Después, sobre Irán e Irak y gran parte de la Península Arábiga. Sin embargo, pese al avance territorial ese imperio fue derrotado hasta que llegaron los turcos, cuando los árabes eran expulsados de España en 1492. Napoleón expresó con acierto lo que había sucedido: el cristianismo requirió 300 años para conquistar medio mundo y el Islam lo hizo en 20. Fue sorprendente que cuando Mahoma murió, ya su prédica había alcanzado del río Indo al Atlántico, del Sahara a los Pirineos y Asia Central. Fue con la dinastía de los omeyas que la nueva religión llegó hasta España desde mediados del siglo VII, pasando por la cuenca del Mediterráneo y, desde luego, el norte de África.

Una de las evidencias de su rápida expansión es que entonces ya había mezquitas, como la del Domo de la Roca en Jerusalem, construida en 691, y otras que la intolerancia ha estado a punto de destruir, como la de Damasco, que data de 707. En la batalla de Poitiers, en 732, el pueblo germánico en la antigua Galia (Francia) impidió la conquista musulmana del centro de Europa. Esa larga historia pasó por las Cruzadas, las guerras que ahondaron la división entre Occidente y Oriente. Recuérdese la presencia de Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos en numerosos y costosos episodios, como el desmembramiento del Imperio Otomano, algo que ocurrió